

Militares y civiles en el juego del poder

En Perú los militares van a pasar el poder a los civiles y precisamente al mismo presidente que destronaron en 1968. En Bolivia se lo deberían pasar también, si respetan los resultados de las elecciones, que favorecen en un 40% al líder de la izquierda: Hernán Siles Zuazo (UDP). En Ecuador se lo transpasaron hace ya 16 meses, y, aunque siempre les quedan a algunos nostalgias del poder, parece que van guardando su palabra.

Una tendencia va apuntando en los países del Pacto Andino que revierte otra más común en América Latina, la de pasar el poder político del Estado de los militares a los civiles. Así, mientras las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay se afianzan, y las de América Central luchan desesperadamente por mantenerse, en el espacio más democrático de América Latina se da la tendencia contraria: los militares ceden por las buenas el poder a los civiles y se retiran a la vida castrense.

Esta tendencia de los militares del Pacto Andino a regresar el poder a los civiles y ellos a la vida castrense, es, sin embargo, una tendencia vacilante, que sigue los vaivenes de la actitud de guerra fría de los Estados Unidos. Para efectos de la guerra fría son más adecuados los gobiernos militares, que transforman fácilmente su propia corrupción y su deseo de perpetuarse como institución en aguerrido anti-comunismo. Son también más dúctiles y manejables por el Pentágono para fines bélicos, que es, en definitiva, lo que a éste le interesa más. Por esa razón el renacimiento del pensamiento y actitud de la guerra fría con los Estados Unidos puede supo-

ner un obstáculo a que se imponga la tendencia civilista que se detecta en los países mencionados.

La tendencia a devolver el poder del Estado a los civiles en el Pacto Andino comenzó hace unos años por el influjo de Venezuela y Colombia y en consonancia con la política del presidente Carter para América Latina. Esa política tiende a substituir las dictaduras, ya que los militares de hecho sólo gobiernan con dictaduras, por regimenes democráticos en su variedad parlamentaria con partidos políticos tradicionales. La política se manifiesta sobre todo en el apoyo decidido de los Estados Unidos a los procesos electorales que pudieran significar la transición de la dictadura a la democracia, como por ejemplo el de Santo Domingo en 1976, el de Bolivia en 1979 y el que pretendieron implementar en El Salvador para suceder al régimen del general Romero.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos quisiera que todos los países de América Latina tuvieran regimenes democráticos tradicionales a ser posible de centro (o sea de derecha) porque no podemos creer que tolerarían triunfos electorales de la izquierda como el de Salvador Allende. Tienen, sin embargo, el problema de que la izquierda puede ganar elecciones tradicionales y el nuevo gobierno pasarse al campo no-alineado o incluso al campo socialista. Ante tal eventualidad, es necesario mantener ejércitos operativos que garanticen la corrección del proceso, si éste se saliera de control. Por eso los ejércitos de las ex-dictaduras militares, aun cuando se retiren a los cuarteles, siguen presentes y actuantes en la vida nacional. Los Estados Unidos

no pueden permitirse el lujo de "desactivar" los ejércitos latino-americanos, porque saben que la democracia tradicional, formal y capitalista, no es suficiente para mantener alejadas a las masas populares de soluciones menos tradicionales y más efectivas para remediar sus crecientes problemas.

Esos ejércitos intactos, operativos, instrumentalizados para garantizar un tipo de democracia, y siempre anti-comunistas convencidos, están expuestos a la tentación permanente de regresar a la palestra política para rectificar todo proceso que no discurra de acuerdo a sus limitados esquemas. Lo que sucedió en Chile con Allende puede suceder fácilmente en Bolivia, Perú y Ecuador; no sería raro en la República Dominicana y quizá tampoco en Colombia y Venezuela, e incluso en México cualquier día su flamante ejército podría terminar con la progresista dictadura del PRI. Sólo Costa Rica que no tiene ejército estaría libre de la amenaza de ser "salvada" por un ejército anti-comunista y dado a la dictadura como forma congénita de gobernar.

El enfrentamiento verbal del alto mando militar de Bolivia con el embajador norteamericano Marvin Weissman (enfrentamiento
que se está repitiendo en otros países) es una
muestra del conflicto que representa para la
política del Departamento de Estado el retirar los
ejércitos a los cuarteles sin desactivar su anticomunismo y su pretendida vocación de salvapatrias; o, en otros casos, sin una compensación
económica por renunciar a las ganancias extraordinarias que deja el ejercicio del poder. Los militares bolivianos pusieron en peligro las elecciones

por que no les agradaba lo que preveían y que sucedió: que triunfara la izquierda, aunque fuera la izquierda moderada de Siles Zuazo. Los Estados Unidos han contenido por ahora las ansias salvadoras de los militares bolivianos; está por verse por cuanto tiempo pueden mantenerlos en los cuarteles.

No podemos olvidarnos de que la política exterior de los Estados Unidos es bicéfala, si no francamente una hidra de varias cabezas; que, además de las diversas tendencias dentro del Departamento de Estado, hay que contar con el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la CIA, y la misma Presidencia. Todos ellos procuran tener su baza (y alguna carta en la manga) ante situaciones y problemas de países extranjeros. Todos tienen sus contactos propios y mueven sus hilos directos. El resultado es que el influjo de los Estados Unidos es polivalente y puede resultar contradictorio.

Eso aparece en el caso del papel del ejército en la política y más en concreto en el regreso de los civiles al poder. Las vacilaciones de los militares en Bolivia y Perú pueden responder, no sólo a dinámica interna de un grupo de generales aficionados a las ventajas de gobernar, si no también a las contradictorias presiones de los centros de poder en Estados Unidos. Es un caso interesante que nos puede dar claves para entender e interpretar la conflictiva política externa de los Estados en otros países de América Latina; por ejemplo en El Salvador.

Julio 10, de 1980.

L.S.